

Santiago, dos de junio de dos mil veintitrés.

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, en el Ingreso Corte N° 184-2023.

Se previene que el Ministro Sr. Dahm concurre a la confirmación del fallo apelado, teniendo en consideración, además, lo siguiente:

1°) Que el recurso de amparo está dirigido en contra del Ministerio Público en razón de haber hecho dos actuaciones. La primera solicitar la separación de investigaciones y la segunda solicitar al Juez la citación para formalizar por el ilícito de abandono de menor.

2°) Que respecto de ambas solicitudes no se advierte cómo es que ellas pueden amagar la libertad del imputado.

Y de acuerdo con el tenor del recurso lo que se pretende es discutir aspectos procesales de la causa, no siendo esta la vía especial que contempla el artículo 21 de la Constitución Política de la República.

3°) Que sin perjuicio de lo anterior, cabe expresar que la primera de ellas es una facultad del Ministerio Público que en nada amaga o restringe algún derecho del imputado cautelado por el artículo 21 de la Constitución Política de la República, y la segunda, también es una facultad del Ministerio Público, quien tiene el monopolio de la acción penal, para comunicar a alguna persona los hechos por los cuales se ha dispuesto una investigación penal.

4°) Que, efectivamente esta Corte Suprema dispuso en la causa rol 50.850-2023, la citación para el cierre de la investigación en la causa principal de que se trata, y señaló que tal decisión lo era sin perjuicio del ejercicio de las facultades



que el ordenamiento jurídico franquea al Ministerio Público. Lo anterior no significa la limitación que reclama la defensa del imputado, al entender que solo puede realizar las acciones a que se refiere el artículo 248 del Código Procesal Penal. La sentencia claramente se refiere a todas las facultades que tiene el órgano persecutor, entre las que están comprendidas aquellas que ejerció.

5°) Que todas las alegaciones de la defensa en orden a la existencia de una desobediencia a la instrucción de la Corte Suprema y a la circunstancia de pretender formalizar por un hecho que ya fue objeto de una formalización anterior respecto del cual se discute si está vencido el plazo de investigación, corresponde discutir las precisamente en la audiencia que ha sido solicitada por el Ministerio Público y dispuesta por el Juez.

Lo anterior reviste la mayor importancia puesto que en los fundamentos del amparo resuelto por este tribunal en la causa rol 50.850-2023, la defensa alegó reiteradamente que los hechos por los cuales el Ministerio Público pretendía re-formalizar al imputado eran distintos a aquellos que fueron objeto de la primitiva formalización, para sostener ahora que tales hechos son los mismos, de modo que no pueden estos ser objeto nuevamente de una segunda formalización.

6°) Que tales situaciones deben necesariamente discutirse en una audiencia con asistencia de todas las partes involucradas.

Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Valderrama y Llanos, quienes estuvieron por revocar la sentencia en alzada y, en su lugar, acoger la acción de amparo intentada por las siguientes consideraciones:

1°) Que el Ministerio Público, en la causa Rit N° 255-2021 seguida ante el Tribunal de Garantía de Arauco, en la audiencia realizada con fecha 10 de marzo de 2023, re-formalizó la investigación contra el amparado Jorge Escobar Escobar,



de hechos constitutivos del delito de homicidio calificado a hechos considerados ahora como delito de abandono de menores y, a renglón seguido, cerró la investigación, actuaciones ambas que esta Corte, en su resolución de 31 de marzo del año en curso dictada en autos rol 50.850-2023, por vulnerar el derecho del amparado a ser juzgado en un plazo razonable, dejó sin efecto, y ordenó a dicho tribunal fijar, “*a la brevedad posible*”, una audiencia para discutir “*únicamente*” el apercibimiento de cierre de la investigación. Lo anterior, agregó esta Corte, “sin perjuicio del ejercicio de las facultades que el ordenamiento jurídico franquea al Ministerio Público”.

2°) Que lo anterior refleja, sin ambages, que esta Corte dejó sin efecto la re-formalización y el cierre de la investigación, no en favor del Ministerio Público, de manera que este pudiera “aprovechar” esa invalidación del cierre de la investigación para seguir ejecutando actos de investigación o ejercer facultades únicamente procedentes en la etapa de pesquisas, como separar investigaciones según el artículo 185 del Código Procesal Penal.

3°) Que, muy por el contrario, esa invalidación se resolvió en favor del amparado, pues como se dijo, precisamente el fundamento de dicha decisión fue que, al haber ya transcurrido el plazo de dos años desde la formalización del amparado, esa fase de investigación del proceso ordinario debía encontrarse cerrada a la sazón y, al no ocurrir todavía ese cierre, y seguir realizando actuaciones, como la re-formalización efectuada el 31 de marzo -o la separación de investigaciones y formalización que hizo e intenta ahora, respectivamente-, constituyen todas ellas del mismo modo, violaciones al derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas.



4°) Que de esa manera, con motivo de la resolución anulatoria de esta Corte, al Ministerio Público únicamente restaba asistir a la audiencia de apercibimiento de cierre -que debía celebrarse “*a la brevedad posible*”- y cerrar la investigación, o no comparecer a la primera y negarse a lo segundo, y aceptar las consecuencias legales previstas para esas hipótesis en el artículo 247 del Código Procesal Penal y, en el evento de cerrar la investigación, ejercer las facultades que el artículo 248 del mismo código prevé.

5°) Que, entonces, la actuación cuestionada del Ministerio Público resulta a todas luces ilegal, porque contraviene frontalmente lo decidido por esta Corte para poner remedio a la patente infracción al derecho a ser juzgado en un plazo razonable constatada en su decisión de 31 de marzo pasado y, es más, deviene en una prolongación y agravamiento de la afectación ya producida a ese derecho, que debió ser definitivamente subsanada haciendo lugar al amparo en estudio;

6°) Que a juicio de estos disidentes, los fundamentos anteriores son suficientes para estimar la acción cautelar constitucional impetrada. No obstante, no está demás expresar que la actuación ilegal del Ministerio Público antes referida es vulneratoria, además, del derecho fundamental de orden procesal de única persecución penal, consagrado en el art. 14 N° 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8° N° 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1° del Código Procesal Penal, del momento que se pretende el inicio de un nuevo proceso en contra del amparado por los mismos hechos respecto de los cuáles concluyó una investigación penal sin acusarlo al estimarse que éstos no ameritaban acusación alguna en contra de aquél.

Por último, y respecto de la procedencia de la presente acción, no debe perderse de vista que ésta no solo protege o ampara en los casos de privación de



la libertad ambulatoria o la seguridad individual, sino también cuando existe una amenaza a tales derechos; la que incuestionablemente puede acontecer en el caso actual, como quiera que una nueva formalización por los mismos hechos cuya persecución penal feneció (aunque dándoles otra calificación jurídica) puede traer aparejada la imposición de medidas cautelares que afecten aquellos bienes jurídicos.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 102.978-2023.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y la Ministra Suplente Sra. María Loreto Gutiérrez A. No firma el Ministro Sr. Dahm, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar en comisión de servicios.



En Santiago, a dos de junio de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

